PERIODISMO INDEPENDIENTE DIGNO DE SU HOGAR
HERALDO
ESTADO DE MÉXICO

SINTONÍA ELECTORAL

Consejera Patricia Lozano Sanabria

Esperanza y responsabilidad democrática

Los recientes resultados electorales en Brasil y Estados Unidos ofrecen una señal esperanzadora para las democracias contemporáneas. Ante la polarización política y el desgaste institucional, amplios sectores de la ciudadanía respaldaron proyectos que reivindican la protección de derechos, la inclusión social y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva consiguió su reelección presidencial con 51.79% de los votos válidos, frente al 48.21% obtenido por Flávio Bolsonaro. Su propuesta de gobierno plantea ampliar los programas sociales, fortalecer los servicios de salud y educación, reducir la jornada laboral y promover una agenda de igualdad de género, protección ambiental y combate a la pobreza. Sin embargo, la estrecha diferencia electoral también revela una sociedad profundamente dividida, cuyo futuro exige construir acuerdos y gobernar más allá de las preferencias partidistas.

En Estados Unidos, las elecciones intermedias del pasado 3 de noviembre representaron un importante triunfo para el Partido Demócrata, que consiguió recuperar el control de ambas cámaras del Congreso. Entre sus resultados destacan la conquista de al menos siete escaños del Senado previamente ocupados por republicanos, así como la recuperación de más de veinte distritos en la Cámara de Representantes. Este respaldo ciudadano abre posibilidades para impulsar una agenda orientada a reducir el costo de vida, ampliar el acceso a servicios de salud, proteger los derechos reproductivos y fortalecer las garantías del sufragio. Asimismo, la nueva composición del Congreso permitirá establecer mayores contrapesos frente a la administración del presidente Donald Trump.

Más allá de las diferencias entre los proyectos políticos de ambos países, los resultados expresan una sentida demanda ciudadana por el cambio y por el apoyo a administraciones capaces de atender preocupaciones cotidianas de la población. No obstante, el respaldo popular constituye una enorme responsabilidad, no un cheque en blanco.

Las fuerzas políticas favorecidas por las urnas deben comprender que sus victorias no pueden diluirse en debates estériles, disputas ideológicas interminables o pugnas internas por posiciones de poder. La ciudadanía exige resultados concretos en materia de bienestar, seguridad, oportunidades económicas y protección de sus libertades. Esta exigencia adquiere mayor relevancia ante el deterioro de la confianza pública, pues de acuerdo con el Pew Research Center, en septiembre de 2025 apenas el 17% de los estadounidenses confiaba en que su gobierno federal actuaría correctamente siempre o la mayor parte del tiempo.

El desencanto con la política representa una advertencia para cualquier gobierno o mayoría legislativa. Sabemos que cuando las expectativas sociales son defraudadas, la frustración puede convertirse en abstencionismo, radicalización o rechazo hacia las propias instituciones democráticas.

Ambas experiencias permiten recordar que la democracia no concluye con la victoria electoral; sino que da comienzo a una nueva etapa de responsabilidades para quienes reciben el mandato ciudadano. El voto es mucho más que un mecanismo para distribuir el poder: constituye una institución fundamental mediante la cual la sociedad expresa sus aspiraciones, legitima a sus representantes y conserva la posibilidad de exigirles cuentas.

Ninguna mayoría electoral debe confundirse con una autorización para gobernar sin límites, prescindir del diálogo o desatender a quienes piensan diferente. La legitimidad democrática se obtiene en las urnas, pero se fortalece cotidianamente mediante el cumplimiento de compromisos, la transparencia, el respeto a las instituciones y la rendición de cuentas. En última instancia, el desafío de quienes hoy celebran sus triunfos será demostrar que la confianza depositada en ellos puede traducirse en mejores condiciones de vida. El voto concede el poder temporalmente, pero es la ciudadanía quien conserva permanentemente el derecho de evaluar su ejercicio.